



Hermosillo, Sonora, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

Sentencia definitiva dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa **SEMARA-PRA-04/2018**, de esta Sala Especializada, en la que se declara la responsabilidad administrativa de la empresa [REDACTED] por la comisión de la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: *el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio*, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades; y se le impone la sanción económica por la cantidad de **\$4,627,218.01** (cuatro millones seiscientos veintisiete mil doscientos dieciocho pesos, con un centavo, moneda nacional); e **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, UN MES, SIETE DÍAS.**

Índice

Contenido	Página
1. Glosario.....	1
2. Antecedentes del caso	2
2.1. Inicio de la investigación.....	2
2.2. Informe de presunta responsabilidad administrativa.....	3
2.3. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.....	3
2.4. Emplazamiento.....	3
2.5. Audiencia inicial.....	3
2.6. Envío del expediente a la Sala Especializada.....	4
2.7. Radicación del expediente SEMARA-PRA-04/2018.....	4
2.8. Admisión de pruebas.....	4
2.9. Período de alegatos.....	4
2.10. Cierre de instrucción y citación para sentencia.....	4
3. Competencia.....	4
4. Fijación de los hechos controvertidos.....	5
5. Análisis de la existencia de la falta administrativa.....	7
6. Responsabilidad administrativa.....	15
7. Individualización de la sanción.....	18
8. Beneficio de reducción de sanción.....	23
9. Ejecución de la sanción.....	25
Puntos Resolutivos.....	26

1. Glosario

I. Autoridad Investigadora:	Unidad de Investigación adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
-----------------------------	---

II. Autoridad Substanciadora:	Unidad de Investigación adscrita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
III. Ayuntamiento:	Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
IV. Magistrado:	El magistrado integrante de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
V. Particular:	Empresa [REDACTED]
VI. Sala Especializada:	Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
VII. Ley de Justicia:	Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

2. Antecedentes.

2.1. Inicio de la investigación.

Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad investigadora tuvo por recibida la cédula de observaciones de la auditoría número SON/PROGREG-NOGALES/17, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, mediante la cual, en lo conducente se le hizo del conocimiento lo siguiente:

"Del análisis a la documentación que integran el expediente de las obras:

1.- Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento de la calle de los pastores, en la colonia Lomas de Fátima, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de nogales, sonora, al amparo del contrato núm. MNS-13-OC09/16, por \$4'002,543.74 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

2.- Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento en calle Bogotá, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora, al amparo del contrato núm. MNS-13-OC08/16, por \$2'607,767.73 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

Se observó que las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 entregadas, por el contratista [REDACTED] para ambas obras carecen de veracidad, por su fecha de emisión,



ya que presentan fecha del 13 de octubre de 2016 en ambas obras, pero la cadena original de los mismos establece como fecha de certificación el 15 de septiembre de 2016, se anexa documentos a la presente cédula de observaciones."

Por lo que, la autoridad investigadora formó el expediente **E.I.09/2018** e inició con las investigaciones correspondientes.¹

2.2. Informe de presunta responsabilidad administrativa.

Con fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la autoridad investigadora elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el que consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de **actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**, consistente en **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, previsto en el artículo 109, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa del particular en su comisión.

Informe de presunta responsabilidad administrativa que, juntamente con el referido expediente **E.I.09/2018**, la autoridad investigadora exhibió ante la autoridad substanciadora, mediante oficio OCEGN21-G637/18, de treinta de abril de dos mil dieciocho.²

2.3. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente **OCEGN-16-A109/18**, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenando emplazar al particular citándolo para que compareciera a la audiencia inicial y diera contestación a las imputaciones y ofreciera las pruebas que considerara oportunas.³

2.4. Emplazamiento.

Mediante diligencia de treinta de julio de dos mil dieciocho, el particular fue emplazado y citado para comparecer a la audiencia inicial, tal como se desprende de las constancias del expediente remitido.

2.5. Audiencia inicial.

El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia inicial, a la que compareció el particular a rendir su declaración por conducto de su representante legal, [REDACTED] en la que, en lo conducente manifestó:

"... la moral asume toda la responsabilidad de lo que se le acusa, por la alteración de los documentos materia del presente asunto, y se asume todas las consecuencias legales, asimismo, por mi conducto la moral acoge los beneficios legales que amerite la presente situación."

¹ Fojas 3 a 12 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

² Fojas 66 a 71 del expediente OCEGN-16-A109/18.

³ Fojas 81 a 86 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

2.6. Envío de expediente a la Sala Especializada.

Mediante oficio OCEGN16-1139/18, de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad sustanciadora remitió a esta Sala Especializada las constancias del citado expediente **OCEGN-16-A109/18**, a efecto de la continuación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa; el cual se tuvo por recibido en este tribunal, el diez de septiembre de dos mil dieciocho.⁴

2.7. Radicación del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

Por auto de diez de septiembre dos mil dieciocho, se tuvo por recibido en esta Sala Especializada el mencionado oficio OCEGN16-1139/18 y el expediente **OCEGN-16-A109/18**, el cual se registró con el número de expediente SEMARA-PRA-04/2018 y se turnó al Magistrado instructor de la Primera Ponencia.⁵

Posteriormente, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, este tribunal se declaró competente para conocer del presente procedimiento de responsabilidad administrativa.⁶

2.8. Admisión de pruebas.

Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se admitieron las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora y se dio vista al particular por el término de cinco días para que manifestara lo que a su interés conviniera.⁷

2.9. Período de alegatos.

Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó la apertura del período de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes a las partes.⁸

2.10. Cierre instrucción y citación para sentencia.

Concluido el período de alegatos, por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve se declaró el cierre de instrucción y se citó el presente asunto para oír resolución.⁹

3. Competencia.

Esta Sala Especializada es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en los artículos 67 TER, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 9 fracción IV, 12 y, 105, de la Ley Estatal de Responsabilidades y, 13 BIS, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa; lo anterior con motivo de que la conducta descrita por la autoridad investigadora en su informe de presunta responsabilidad administrativa, constituye un acto de un particular vinculado con faltas graves.

⁴ Foja 1 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

⁵ Foja 114 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

⁶ Fojas 115 y 116 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

⁷ Fojas 145 y 146 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

⁸ Foja 165 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

⁹ Foja 181 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.



4. Fijación de los hechos controvertidos.

La autoridad investigadora en el informe de presunta responsabilidad administrativa de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de **actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**, consistente en **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, previsto en el artículo 109, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa del particular en su comisión.

Lo anterior, expuso la autoridad investigadora, en virtud de que el particular presentó información alterada del cumplimiento de obligaciones fiscales, en dos contratos de infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimentación, al carecer de veracidad en su fecha de emisión, ya que fueron presentados con fecha trece de octubre de dos mil dieciséis en ambas obras, pero la cadena original de los mismos establece como fecha de certificación el quince de septiembre de dos mil dieciséis. Por lo que, con su actuar, el particular incurrió en la conducta imputada con el propósito de lograr una autorización de un beneficio, ventaja o de perjudicar a persona alguna.

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos, se desprende que con fecha **trece de octubre de dos mil dieciséis**, el particular celebró dos **contratos de obra pública** con el Ayuntamiento, específicamente los siguientes:

- a) Contrato número **MNS-I3-OC09/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un monto total de **\$4,002,543.72** (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).
- b) Contrato número **MNS-I3-OC08/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un monto total de **\$2,607,767.73** (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Ambos contratos de los que se advierte que, en el apartado de **declaraciones** del contratista (particular), en el inciso V, éste manifestó que su clave en el Registro Federal de Contribuyente vigente es [REDACTED] que bajo protesta de decir verdad se encontraba al corriente en sus obligaciones fiscales tributarias.

Mientras que, en el inciso VII el particular declaró que conocía y se sujetaba al contenido y requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes en esta materia, así como el contenido de los anexos que se refieren a: los Proyectos de ingeniería; Catálogo de Conceptos, en el que se indican los conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y el importe total de la proposición;

análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; y programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; y demás documentos presentados en su propuesta y que debidamente firmados por las partes, integran los contratos mencionados, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

En tanto que, en el inciso IX, el particular declaró bajo protesta de decir verdad que era sabedor y conocedor del artículo 24 Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora y que no se encontraba dentro del mismo, así como estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Además, en los dos contratos de referencia, en el apartado de **cláusulas**, en su “VIGÉSIMA SEXTA.- **LEGISLACIÓN APLICABLE.**”, el particular se obligó a sujetarse estrictamente para la ejecución de las obras materia de los citados contratos, a todas y cada una de las cláusulas que los integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su reglamento, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal correspondiente y demás normas y disposiciones administrativas que le Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa aplicables.¹⁰

Por otro lado, el particular, como requisito para las contrataciones mencionadas, exhibió las **opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales** previstas en la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016, ambas de fecha **trece de octubre de dos mil dieciséis**, de las que se desprende que en respuesta a la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones, se le informó que:

“En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones fiscales relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyente, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinión Positiva...”

Sin embargo, mediante la **cédula de observaciones** de la **auditoría** número **SON/PROREG-NOGALES/17**, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, en lo conducente se hizo del conocimiento a la autoridad investigadora, lo siguiente:

“Del análisis a la documentación que integran el expediente de las obras:

- 1.- Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento de la calle de los pastores, en la colonia Lomas de Fátima, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de nogales, sonora, al amparo del contrato núm. MNS-13-OC09/16, por \$4'002,543.74 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.*
- 2.- Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento en calle Bogotá, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora, al amparo del contrato núm. MNS-13-OC08/16, por \$2'607,767.73 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.*

¹⁰ Fojas 20 a 64 del expediente SEMARA-JA-PRA-04/2018.



Se observó que las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 entregados, por el contratista [REDACTED], para ambas obras carecen de veracidad, por su fecha de emisión, ya que presentan fecha del 13 de octubre de 2016 en ambas obras, pero la cadena original de los mismos establece como fecha de certificación el 15 de septiembre de 2016, se anexa documentos a la presente cédula de observaciones.¹¹

En atención a lo anterior, la autoridad investigadora mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente **E.I.09/2018**, ordenó el inicio de la investigación y realizó las actuaciones correspondientes; y una vez concluida la investigación, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el que consideró que existen elementos probatorios para acreditar la existencia de **actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves**, consistente en **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, previsto en el artículo 109, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así como la probable responsabilidad administrativa del particular en su comisión.

Posteriormente, por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente **OCEGN-16-A109/18**, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa, ordenando emplazar al particular citándolo para que compareciera a la audiencia inicial, la cual tuvo su verificativo el catorce de agosto de dos mil dieciocho, a la que compareció el particular a rendir su declaración, en la que manifestó:

"... la moral asume toda la responsabilidad de lo que se le acusa, por la alteración de los documentos materia del presente asunto, y se asume todas las consecuencias legales, asimismo, por mi conducto la moral acoge los beneficios legales que amerite la presente situación."

5. Análisis de la existencia de la falta administrativa.

Se encuentra acreditado en autos la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: **el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio**, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades, que establece:

"Artículo 109.- Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna."

(Lo resaltado no es de origen)

Hipótesis específica en el caso que se acredita y se compone los siguientes elementos:

¹¹ Fojas 7 a 12 del expediente SEMARA-JA-PRA-04/2018.

- a) La calidad específica del sujeto activo como particular
- b) La existencia de un documento alterado
- c) La acción de presentar el documento alterado
- d) Que lo anterior lo realice con el propósito de lograr una autorización y un beneficio.

El primer elemento, la calidad específica del sujeto activo únicamente atiende a que éste sea un particular, en el caso, es una persona moral denominada "[REDACTED]"

[REDACTED], cuyo representante legal es [REDACTED].
Lo anterior, se tiene por acreditado con la copia certificada de la escritura pública número 10,557 (diez mil quinientos cincuenta y siete), volumen número 154 (ciento cincuenta y cuatro), de catorce de febrero de dos mil once, pasada ante la fe del Notario Público Número 38 (treinta y ocho), licenciado [REDACTED] en Nogales, Sonora, de la que se desprende que la indicada empresa constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que [REDACTED] aparece como Administrador Único, quien dirige y representa la mencionada persona moral.¹²

Documento público que tiene valor probatorio pleno, por ser testimonio de una escritura original, el cual goza de fe pública, con fundamento en los artículos 198 y 199 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con los numerales 283, fracción I y 323, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Por otro lado, el segundo elemento, consistente en *la existencia de un documento alterado*, es conveniente especificar qué significa la palabra "*alterar*", la cual, el Diccionario de la Real Academia Española define como: "*cambiar la esencia o forma de algo*".

Bajo ese contexto, el segundo elemento se constituye con la *existencia de un documento del cual se ha cambiado su esencia o forma*, el cual, se encuentra demostrado con el formato de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, a nombre del particular, con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] de la que se desprende que en respuesta a la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones, al particular se le informó que:

"En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones fiscales relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyente, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinión Positiva..."

De igual forma, del referido documento se desprende la cadena original:

[REDACTED]

¹² Fojas 91 a 101 del Expediente SEMARA-PRA-04/2018.



(Lo resaltado no es de origen)

Así como el sello digital:

[REDACTED]

Documento que tiene valor de indicio y se concatena con la copia certificada de formato de **Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales** de fecha **quince de septiembre** de dos mil dieciséis, a nombre del particular, con el Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] que se ilustra a continuación:

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales original, en la que el particular se basó para alterar o cambiar su esencia, en el caso, la fecha de expedición del documento, pues de éste se advierte que en respuesta a la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones, al particular se le informó que:

"En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones fiscales relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyente, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinión Positiva..."

De igual forma, del referido documento se desprende la cadena original:

"[REDACTED]"

(Lo resaltado no es de origen)

Así como el sello digital:

"[REDACTED]"

Este último formato de **Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales** de fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, que fue remitido vía informe a la autoridad investigadora por el Director de Infraestructura urbana y Obras Públicas del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, mediante oficio 0-119/17/18, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho.¹³

El cual, tiene valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 173, 198 y 199 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con los numerales 283, fracción III y 323,

¹³ Fojas 14 y 15 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.

fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser un documento público auténtico, que se halla en los archivos públicos dependientes del Gobierno Federal, en el caso, en los archivos del Servicio de Administración tributaria.

Y con el cual, se pone en evidencia que el diverso escrito de **Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis**, presentado por el particular, fue alterado o cambiado en su fecha, pues como se puede cotejar en ambos documentos, los datos del nombre del particular, su Registro Federal de Contribuyentes, la cadena Original y el sello digital son idénticos; sin embargo, la data que se plasma en la parte superior derecha del primer documento, no corresponde a la que se señala en la cadena original, que especifica como fecha el quince de septiembre de dos mil dieciséis, tal como se ilustra a continuación:

012

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fecha de expedición: 15 de octubre de 2016

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 018 de 019

Clave de R.F.C.: [REDACTED]

Nombre, Denominación o Razón Social: HELU DISARROLLOS E INGENIERIA SA DE CV

Examinado contribuyente.

Resolución de expedir:

En atención a las resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, se le informó lo siguiente:

En los términos de la Ley de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, que es el instrumento en que se funda esta resolución, se emite la presente opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la persona física o moral que se indica a continuación, de acuerdo a la información que se le proporcionó en el momento de su expedición, la cual se encuentra en el expediente de la causa.

La presente opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales se emite en el momento de expedirla, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

Expedido en la ciudad de México, D.F., a los 15 días del mes de octubre de 2016, por el Sr. [REDACTED]

NOTA:

1. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

2. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

3. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

4. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

5. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

6. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

7. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

8. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

9. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

10. La persona física o moral que se indica a continuación, se encuentra en el expediente de la causa, sin que se haya realizado una revisión de los libros contables de la persona física o moral que se indica a continuación, por lo que se reserva la facultad de volverla a revisar en el futuro.

Fecha de la cadena original

Medios probatorios con los que queda demostrado que el formato de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis, fue alterado o cambiado en su fecha de expedición, con lo que queda colmado el segundo elemento de la falta administrativa.

En otro rubro, el tercer y cuarto elementos de la falta administrativa, atinentes a la acción de *presentar el documento alterado con el propósito de obtener una*



autorización y un beneficio, éstos se tienen acreditado con la **cédula de observaciones de la auditoría** número **SON/PROREG-NOGALES/17**, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, con la que, en lo conducente se hizo del conocimiento a la autoridad investigadora, lo siguiente:

"Del análisis a la documentación que integran el expediente de las obras:

1.- *Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento de la calle de los pastores, en la colonia Lomas de Fátima, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de nogales, sonora, al amparo del contrato núm. MNS-I3-OC09/16, por \$4'002,543.74 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.*

2.- *Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento en calle Bogotá, en la localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales, Sonora, al amparo del contrato núm. MNS-I3-OC08/16, por \$2'607,767.73 IVA incluido, con un periodo de ejecución del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2016.*

Se observó que las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en la Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 entregadas, por el contratista [REDACTED]

[REDACTED] para ambas obras carecen de veracidad, por su fecha de emisión, ya que presentan fecha del 13 de octubre de 2016 en ambas obras, pero la cadena original de los mismos establece como fecha de certificación el 15 de septiembre de 2016, se anexa documentos a la presente cédula de observaciones.¹⁴

Cédula de observaciones que se relacionan con los **contratos de obra pública** de fecha **trece de octubre de dos mil dieciséis**, celebrados entre el particular y el Ayuntamiento, específicamente los siguientes:

a) Contrato número **MNS-I3-OC09/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un monto total de **\$4,002,543.72** (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).

b) Contrato número **MNS-I3-OC08/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un monto total de **\$2,607,767.73** (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Ambos contratos de los que se advierte que, en el apartado de **declaraciones** del contratista (particular), en el inciso V, éste manifestó que su clave en el Registro Federal de Contribuyente vigente es R.F.C. [REDACTED] que bajo protesta de decir verdad se encontraba al corriente en sus obligaciones fiscales tributarias.

¹⁴ Fojas 7 a 12 del expediente SEMARA-JA-PRA-04/2018.

Mientras que, en el inciso VII el particular declaró que conocía y se sujetaba al contenido y requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes en esta materia, así como el contenido de los anexos que se refieren a: los Proyectos de ingeniería; Catálogo de Conceptos, en el que se indican los conceptos de trabajo y sus cantidades, unidades de medida, precios unitarios e importes parciales y el importe total de la proposición; análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; y programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; y demás documentos presentados en su propuesta y que debidamente firmados por las partes, integran los contratos mencionados, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

En tanto que, en el inciso IX, el particular declaró bajo protesta de decir verdad que era sabedor y conocedor del artículo 24 Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora y que no se encontraba dentro del mismo, así como estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Además, en los dos contratos de referencia, en el apartado de *cláusulas*, en su “VIGÉSIMA SEXTA.- *LEGISLACIÓN APLICABLE.*”, el particular se obligó a sujetarse estrictamente para la ejecución de las obras materia de los citados contratos, a todas y cada una de las cláusulas que los integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su reglamento, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal correspondiente y demás normas y disposiciones administrativas que le Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa aplicables.¹⁵

Documentos públicos que tienen valor probatorio pleno, por haber sido expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, con fundamento en los artículos 173, 198 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con el numeral 283, fracción II y 323, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Medios probatorios con los que se demuestra que el particular presentó el documento alterado, es decir, presentó ante el Ayuntamiento el formato de Opinión de Obligaciones Fiscales de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, que modificó en este último dato, basándose en la opinión original de fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis.

Se allega a tal extremo, pues de las citadas cédulas de observaciones se desprende que existió una auditoría realizada al Ayuntamiento, de las que se advierte que entre los documentos que integran las obras de referencia, se encontraban los formatos de opinión de obligaciones fiscales alterados que el particular entregó a esa autoridad para llevar cabo los contratos mencionados; motivo por el cual se hizo la observación y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Además, se llega a tal conclusión con la celebración de los referidos contratos entre el

¹⁵ Folias 20 a 64 del expediente SEMARA-JA-PRA-04/2018.



particular y el Ayuntamiento, pues para llegar a concretar aquéllos, el particular exhibió documentos como requisitos necesarios para su otorgamiento, entre los que se encontraban los formatos de Opinión de Cumplimiento Fiscal, que el particular alteró.

Esto es así, pues el mencionado documento se solicita para llevar a cabo todo tipo de contratación de obra pública, como requisito y constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los particulares, atendiendo a la prohibición que refiere el artículo 24 Bis del Código Fiscal de Sonora, que establece:

“ARTICULO 24 BIS.- *Los Poderes del Estado, incluidas en el Poder Ejecutivo las entidades paraestatales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar.”*

(Lo resaltado no es de origen)

Probanzas con las que no solamente queda demostrado que el particular presentó ante el Ayuntamiento los formatos de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales alterados, sino que además llevó a cabo tal acción para estar en condiciones de realizar con el Ayuntamiento los siguientes contratos:

- a) Contrato número MNS-I3-OC09/16 denominado **“INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA”**, por un monto total de \$4,002,543.72 (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).
- b) Contrato número MNS-I3-OC08/16 denominado **“INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA”**, por un monto total de \$2,607,767.73 (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Es decir, con los medios probatorios señalados se acredita además que el particular realizó lo anterior con el propósito de lograr una autorización y un beneficio.

Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se expuso en párrafos precedentes, el formato de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales al ser un documento requisito indispensable para la autorización y otorgamiento de los contratos de obra pública en comento, el particular presentó los referidos documentos alterados, con el propósito de estar en condiciones de obtener la autorización y celebración los contratos de obra pública con el Ayuntamiento.

En adición, el particular pretendió obtener un **beneficio económico**, pues en los mismos contratos, en sus respectivas cláusulas “CUARTA. MONTO DEL CONTRATO” se establecieron los costos o montos que acordaron el particular y el Ayuntamiento, para el pago de los trabajos que realizaría el particular, en su carácter de contratista.

Siendo que, el contrato número **MNS-I3-OC09/16** denominado “**INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**”, lo fue por un monto total de **\$4,002,543.72** (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).

En tanto que, el diverso contrato número **MNS-I3-OC08/16** denominado “**INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**”, lo fue por un monto total de **\$2,607,767.73** (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Danto un **monto total del beneficio** por los dos contratos de **\$6,610,311.45** (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional).

Lo cual, además se corrobora con la **cédula de observaciones** de la auditoría número **SON/PROREG-NOGALES/17**, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, de la que se desprende que los expedientes revisados de las obras de referencia, lo eran de obras realizadas con cargo a la inversión autorizada.

Aunado a las anteriores probanzas, se tiene el acta de la **audiencia inicial** celebrada el catorce de agosto de dos mil dieciocho, ante la autoridad substanciadora, en el expediente **E.I.09/2018**, a la que **compareció el particular a rendir su declaración**, y en la que manifestó:

“... la moral asume toda la responsabilidad de lo que se le acusa, por la alteración de los documentos materia del presente asunto, y se asume todas las consecuencias legales, asimismo, por mi conducto la moral acoge los beneficios legales que amerite la presente situación.”¹⁶

Diligencia que tiene valor probatorio pleno, por haber sido expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con fundamento en los artículos 173, 198 y 199, de la Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con el numeral 283, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Actuación de la que se desprende la admisión expresa por parte del particular respecto a la alteración de los documentos que se le imputa, la cual se encuentra corroborada con los medios probatorios ya reseñados y que de manera concatenada ponen en evidencia que el particular presentó los formatos de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones

¹⁶ Fojas 89 y 90 del expediente SEMARA-PRA-04/2018.



Fiscales alterados con el propósito de tener la autorización de los contratos de obra pública mencionados y con ellos además, obtener un beneficio económico de **\$6,610,311.45** (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional), con lo cual se tiene por demostrado el **cuarto elemento** de la falta administrativa en análisis.

Con lo anterior, se determina que con los medios de prueba analizados y valorados en párrafos precedentes, administrados entre sí en forma lógica y jurídica, conforme a los artículos 173, 198 y 199 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con los preceptos 283, 323, 325 y 330, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia, hacen prueba plena y se consideran idóneos y suficientes para acreditar la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: **el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio**, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Toda vez que se acreditó que el trece de octubre de dos mil dieciséis, un particular presentó ante el Ayuntamiento dos formatos de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales alterados; lo anterior con el propósito de lograr la autorización de los contratos de obra pública: número **MNS-13-OC09/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, y el diverso número **MNS-13-OC08/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, y así obtener además un beneficio económico por la cantidad total de **\$6,610,311.45** (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional).

6. Responsabilidad administrativa.

Se encuentra acreditada en autos la responsabilidad administrativa del particular **[REDACTED]** representante legal de la empresa "**[REDACTED]**", en la comisión de la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: **el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio**, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades; cometida por el particular por sí mismo y de manera dolosa.

Ello es así, en razón de que los medios de prueba analizados y valorados en el apartado que antecede, se aprecia que el infractor de la Ley Estatal de Responsabilidades conocía los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho, y aún así quiso su resultado.

Es decir, el particular por conducto de su representante legal, [REDACTED] en las circunstancias de modo, tiempo y lugar anteriormente descritas, alteró los formatos de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones emitidos por el Sistema de Administración Tributaria, con el propósito de lograr la autorización de los contratos de obra pública: número **MNS-I3-OC09/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, y el diverso número **MNS-I3-OC08/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, y así obtener además un beneficio económico.

Con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado que es la debida administración pública y el patrimonio del Ayuntamiento.

Falta administrativa que se acredita en forma dolosa.

Para concluir en la forma que antecede, debe tomarse en consideración fundamentalmente el contenido y alcance probatorio de la declaración de J. [REDACTED] representante legal de la empresa [REDACTED] contenida en la audiencia inicial celebrada ante la autoridad substanciadora, en la que admitió haber alterado los formatos en comento.

Deposición que se robustece con la **cédula de observaciones** de la auditoría número **SON/PROREG-NOGALES/17**, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, con la que se hizo del conocimiento a la autoridad investigadora que las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales entregadas por el contratista "[REDACTED]", para las obras Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento al amparo de los contratos números **MNS-I3-OC09/16** y **MNS-I3-OC08/16**, ambos carecen de veracidad por su fecha de emisión, ya que presentan fecha del trece de octubre de dos mil dieciséis, pero la cadena original de los mismos establece como fecha de certificación el quince de septiembre de dos mil dieciséis.

Aunado a ello, se cuenta con las copias certificadas de los mencionados **contratos de obra pública de trece de octubre de dos mil dieciséis**, específicamente:

- a) Contrato número **MNS-I3-OC09/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES, EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un monto total de **\$4,002,543.72** (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).
- b) Contrato número **MNS-I3-OC08/16** denominado **"INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA"**, por un



monto total de **\$2,607,767.73** (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Los anteriores medios de prueba fueron valorados en el apartado que precede, por lo que nos remitimos a los razonamientos de valoración plasmados, a fin de no caer en repeticiones innecesarias, por lo que se reproducen como si a la letra se insertaran.

De ahí que las anteriores probanzas, apreciadas en su conjunto, resultan idóneas para acreditar la intervención del particular de manera directa en la conducta reprochada, pues por conducto de su representante legal alteró los formatos de Opinión de Obligaciones Fiscales afectas, con el propósito de lograr la autorización de los multicitados contratos de obra pública y el beneficio económico por la cantidad total de \$6,610,311.45 (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional); por lo que tiene el carácter de autor.

Además, no se acreditó causa de exclusión de la falta administrativa a favor del particular, ni se probó en su beneficio alguna causa de justificación como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, por lo que la referida conducta es antijurídica al no existir constancia de que el particular se encontraba amparado en alguna de las mencionadas causas de justificación.

Tampoco se probó que al consumarse aquel comportamiento, el particular no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de esos hechos, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión, menos aún se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era lícita.

Máxime que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra, exigiéndole por tanto un comportamiento diverso al realizado, es decir, ajustado a derecho, pues además el representante legal del particular es mayor de dieciocho años y al momento de cometer la falta administrativa de referencia no se encontraba bajo los efectos de algún trastorno mental transitorio o padeciera desarrollo intelectual retardado; por ello, su comportamiento le es reprochable a título administrativo y se estima acreditada su responsabilidad.

En tales condiciones, al encontrarse demostrados los elementos de la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: ***el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio***, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades; así como la responsabilidad administrativa del particular en su comisión, lo procedente es dictar **SENTENCIA DE CONDENA** en su contra.

|
|
|

7. Individualización de la Sanción.

En el caso quedó demostrado en autos que el particular es una persona moral, por lo que las sanciones aplicables a la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: **el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio**, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades, son las que el artículo 121, fracción II, de esa ley, que en lo conducente estipula:

"II.- Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley; y

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares.

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los denuncien."

(Lo resaltado no es de origen)

Parámetros dentro de los cuales abarcará el arbitrio de este tribunal en la individualización de la sanción.



Ahora bien, para la imposición de las sanciones por faltas de particulares se deberá tomar en cuenta los lineamientos que marcan los artículos 122 y 124, de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que habrá de considerarse los siguientes aspectos:

I. El grado de participación del o los sujetos en la falta de particulares.

El particular ejecutó la falta administrativa por su cuenta, o sea, está en calidad de autor, en la que asumió por sí los riesgos y consecuencias legales de su conducta al alterar los documentos afectos y presentarlos ante el Ayuntamiento, teniendo a su alcance el dominio de los acontecimientos que pudo detener o dejar de hacerlo; aspecto que le perjudica.

II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley.

Al respecto, el artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, establece que se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Sin embargo, en autos no existen constancias que pongan en evidencia que el particular hubiere incurrido en una infracción diversa a la que aquí se sentencia; por lo que en el caso no se tiene por actualizada la figura de reincidencia.

III. La capacidad económica del infractor.

En el caso no se allegaron medios probatorios que acrediten la capacidad económica del actor, por lo que, no es posible cuantificarla.

IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado.

En este aspecto, fue puesto en peligro el buen gobierno y adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, en razón de que el particular alteró y presentó ante el Ayuntamiento un documento con el que se obtiene la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria, el cual es indispensable exhibir para llevar a cabo alguna contratación de obra pública, por ser este documento la constancia de que el particular se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, a fin de que las autoridades no incurran en alguna responsabilidad, en virtud de la prohibición expresa establecida en el artículo 24 Bis del Código Fiscal de Sonora, que en lo conducente establece que los Poderes del Estado, incluidas en el Poder Ejecutivo las entidades paraestatales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; aspecto que le perjudica.

Al respecto, cabe señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho humano a una buena administración pública.

En ese sentido, toda persona tiene derecho al buen gobierno una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Asimismo, cabe precisar que la buena administración de instituciones públicas es un derecho ciudadano, de naturaleza fundamental, estrechamente vinculado con el interés general, que es el fundamento de la administración pública y los derechos ciudadanos, y el cual se refiere al interés de toda la colectividad, de todos los integrantes de la sociedad.

En ese rubro, es conveniente señalar que todas las personas en una sociedad que intervienen en alguna actividad con el Estado, también se encuentran constreñidas a participar en cumplimiento a las obligaciones legales estipuladas para la actividad o trámite que en su caso efectúe con el Estado.

Caso concreto, tenemos que el particular realizó un contrato con el Ayuntamiento, pero sin dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos legales estipulados para ello, pues presentó dos documentos alterados, con lo que contribuyó a la indebida administración pública.

Lo cual, no puede pasarse por alto, pues de ser así, ese tipo de conductas, al dejarse impunes, tendrían un efecto replicador en su entorno, que perturbaría el buen gobierno de una sociedad, al extremo de llegar a afectaciones no sólo económicas, sino de integridad y seguridad física, pues las medidas y obligaciones legales que se imponen a los particulares para llevar a cabo contrataciones de obra pública con las entidades de la administración pública, adquieren sustento en la obligación que tiene el Estado de garantizar el bienestar y seguridad de las personas que tendrán el goce y disfrute de las obras realizadas, sin temor a daños físicos y materiales.

Además, de la obligación del estado de aplicar los recursos públicos invertidos en la obra pública correspondiente, con eficiencia, eficacia y transparencia, así como todos los trámites que se llevan a cabo para su consumación.

De ahí que, el daño causado no es de interés particular, sino de forma general, ya que afecta a toda una sociedad que tiene el derecho a la implementación de un buen gobierno y debida administración pública.

V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

El monto del beneficio obtenido por el particular fue el establecido en los contratos de obra pública plasmados en el cuerpo de la sentencia.

Siendo que, el contrato número **MNS-I3-OC09/16** denominado **“INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES,**



EN LA COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA”, lo fue por un monto total de \$4,002,543.72 (cuatro millones dos mil quinientos cuarenta y tres pesos con setenta y dos centavos, moneda nacional).

En tanto que, el diverso contrato número **MNS-I3-OC08/16** denominado **“INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA”**, lo fue por un monto total de **\$2,607,767.73** (dos millones seiscientos siete mil setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos, moneda nacional).

Danto un **monto total del beneficio** por los dos contratos de **\$6,610,311.45** (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional).

Lo anterior es así, pues de acuerdo a la **cédula de observaciones** de la **auditoría** número **SON/PROREG-NOGALES/17**, de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, realizada al municipio de Nogales, Sonora, por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, los expedientes revisados lo eran respecto de obras realizadas con cargo a la inversión autorizada.

Ahora bien, de los anteriores factores de individualización, se advierte que son más los que perjudican al particular.

Así, la ponderación de todos los datos y circunstancias tomados en cuenta, conducen a determinar que el grado de reprochabilidad del particular se ubica como **superior al mínimo**; por lo que en el caso, es considerable imponer al particular las penas estipuladas en el artículo 121, fracción II, incisos a) y b), de la Ley Estatal de Responsabilidades, que estipula:

“II.- Tratándose de personas morales:

- a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;*
- b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;...”*

En consecuencia, resulta justo, equitativo y condigno imponerle la **SANCIÓN ECONÓMICA** por la cantidad de **\$6,610,311.45** (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional), equivalente a un tanto del beneficio económico obtenido; e **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.**

En apoyo a lo anteriormente anotado, se citan las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y texto siguientes:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS. El principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones a los servidores públicos contemplado en el artículo 113 constitucional, obliga al legislador a prever en la ley que las sanciones económicas correspondan por lo menos al beneficio económico obtenido por el responsable o los daños y perjuicios patrimoniales causados y, por otro, que no excedan de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que la autoridad podrá imponer sanciones económicas por un monto mínimo que no podrá ser igual o inferior a los daños causados, mientras que el monto máximo podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado. En consecuencia, el precepto respeta cabalmente las exigencias derivadas de la garantía de proporcionalidad contemplada en el artículo 113 constitucional.¹⁷

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN. El término "sanción" es ambiguo, pues admite distintas formas o tiene significados diversos. En principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un punto de vista estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que se centra en la reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible distinguir diferentes acepciones cuya naturaleza diverge considerablemente una de la otra. Así, por ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, pero aquella que establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos requisitos de validez o existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida como reproche de una conducta que se desvía de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de responsabilidad -civil, política, administrativa o penal-. A partir de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente que, aun cuando ambas facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo incluso nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la posibilidad de sancionar, en sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad punitiva. Es precisamente éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención de los órganos internos de control y de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo a la proyección que tiene sobre la vida de las personas, se ha considerado necesario reconocer la existencia de un debido proceso administrativo, con los alcances que le han dado este alto tribunal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos términos, estaremos ante una manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.¹⁸

¹⁷ Tesis: 1a. XLVI/2013 (10a.) consultable en a página 842, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Décima Época, con número de registro: 2002903.

¹⁸ Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.) visible en la página 441, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, con número de registro: 2013954.



8. Beneficio de reducción de sanción.

De acuerdo al artículo 128 de la Ley Estatal de Responsabilidades, la persona que haya realizado alguna de las faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo 129 de esa ley, que establece:

"Artículo 129.- La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares.

Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

I.- Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa;

II.- Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la cometió;

III.- Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa; y

IV.- Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de convicción presentados.

El Comité Coordinador Estatal podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia.

Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda.

(Lo resaltado no es de origen)

Ahora bien, en el caso específico el particular admitió su responsabilidad administrativa mediante declaración realizada en la audiencia inicial de catorce de agosto de dos mil dieciocho, a la que compareció el particular a rendir su declaración, en la que manifestó:

“... la moral asume toda la responsabilidad de lo que se le acusa, por la alteración de los documentos materia del presente asunto, y se asume todas las consecuencias legales, asimismo, por mi conducto la moral acoge los beneficios legales que amerite la presente situación.”

Luego, cabe precisar que mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente **OCEGN-16-A109/18**, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa, con lo que, de conformidad con el numeral 152 de la Ley Estatal de Responsabilidades, en esa fecha dio inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa.

De lo que se obtiene que, **la declaración emitida por el particular en la que admitió la conducta reprochada, lo fue con posterioridad al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa**, por lo que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el último párrafo del artículo 129 transcrito, por lo que, de ser procedente el indicado beneficio, **se le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable.**

Ahora bien, en un análisis de las constancias en relación con los requisitos establecidos en el artículo 129, de la Ley Estatal de Responsabilidades, se observa que el particular cumple con los parámetros establecidos en el citado numeral.

Se afirma lo anterior, pues el particular admitió su responsabilidad administrativa ante la autoridad sustanciadora, encuadrando en la hipótesis contenida en la parte final del referido precepto.

Asimismo, al ser entonces el único presunto infractor, no se había notificado a otros el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, cumpliendo así con el requisito estipulado en la fracción I, del citado ordinal.

Además, el particular es el sujeto involucrado en la infracción imputada, y el primero en aportar elementos de convicción suficientes que, a juicio de este tribunal, permiten comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad del particular que aquí se sanciona; con lo que queda colmado el requisito expuesto en la fracción II, del multicitado artículo.

Aunado a lo anterior, el particular cooperó en forma plena y continua con la autoridad competente que llevó a cabo la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues fue ante esta autoridad ante la cual compareció y rindió su declaración en la que admitió su responsabilidad administrativa; con lo que se tiene satisfecho el requisito contemplado en la fracción III, de referido artículo.

En adición, el particular interesado realizó una conducta de carácter instantánea por actualizarse al momento en que el particular alteró el documento y lo presentó ante el Ayuntamiento, por lo que no fue necesario suspender su participación en la conducta reprochada, colmándose así la última de las exigencias establecidas en el mencionado numeral 129.



Sin soslayar que lo manifestado por el particular se encuentra corroborado con las pruebas reseñadas en esta sentencia, las que ponen en evidencia la veracidad de la confesión realizada, lo anterior atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción IV del multicitado artículo 129.

En esa tesitura, al tenerse por satisfechos los requerimientos estipulados en el artículo 129, de la Ley Estatal de Responsabilidades, es procedente conceder al particular el beneficio de la reducción de sanción que contempla el último párrafo de ese numeral, que lo es de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable.

De ahí que, en ejercicio del arbitrio de esta Sala Especializada contemplado en el artículo antes referido, se determina hacer una reducción del treinta por ciento a la sanción económica por la cantidad de \$6,610,311.45 (seis millones seiscientos diez mil trescientos once pesos con cuarenta y cinco pesos, moneda nacional), así como a la sanción de inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo de tres años; que se impusieron en esta sentencia al particular.

Reducción del treinta por ciento a la sanción económica aquí impuesta, que asciende a la cantidad de asciende a \$1, 983,093.43 (un millón novecientos ochenta y tres mil noventa y tres pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional).

En tanto que, que la reducción del treinta por ciento de los tres años impuestos como sanción de inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, corresponde a diez meses, veintiocho días.

En esa tesitura, atendiendo a la reducción de la sanción concedida, se impone al particular la SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de \$4, 627,218.01 (cuatro millones seiscientos veintisiete mil doscientos dieciocho pesos, con un centavo, moneda nacional); e INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, UN MES, SIETE DÍAS.

9. Ejecución de la sanción.

La sanción económica impuesta por este Tribunal constituirá crédito fiscal a favor de la Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la cual se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora, tratándose de contribuciones y aprovechamientos, y se hará efectiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento. Lo anterior, de conformidad con los artículos 124, fracción III, 126 y 262, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En esa tesitura, con fundamento en el artículo 125 de la citada ley, hágase lo anterior del conocimiento al particular, requiriéndole el pago de la sanción económica impuesta.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 264, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades, **una vez que cause ejecutoria** la presente sentencia, **gírese oficio a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora**, comunicándole el sentido de la presente sentencia para su cumplimiento, para que realice las gestiones correspondientes a fin de lograr el cobro y pago por parte del particular de la sanción económica impuesta.

En otro contexto, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 67 TER, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 9 fracción IV, en relación con el 3, fracción XXX, 12, 105, 121, fracción II, inciso a), 122, 123, 124, fracción III y 247 de la Ley Estatal de Responsabilidades; y, 13 BIS, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, se resuelve el presente asunto bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. El particular es responsable en la comisión de la falta administrativa **UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA**, en la hipótesis: ***el particular que presente documentación alterada con el propósito de lograr una autorización y un beneficio***, prevista en el artículo 109, párrafo primero, de la Ley Estatal de Responsabilidades; por los motivos y fundamento expuestos en los apartados 5 y 6 de esta sentencia.

SEGUNDO. Se impone al particular la sanción económica por la cantidad de **\$4,627,218.01** (cuatro millones seiscientos veintisiete mil doscientos dieciocho pesos, con un centavo, moneda nacional); e **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, UN MES, SIETE DÍAS**; determinadas en el apartado 8, al habérsele concedido el beneficio de reducción de las sanciones impuestas en el rubro 7 de esta sentencia.

TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, gírese oficio a la **Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Sonora**, comunicándole el sentido de la presente sentencia para su cumplimiento, para que realice las gestiones correspondientes a fin de lograr el cobro y pago por parte del particular de la sanción económica impuesta, en los términos plasmado en el punto 9 de esta sentencia.

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes; hágaseles saber el derecho y término de quince días hábiles, que el artículo 255 de la Ley Estatal de



Responsabilidades, les concede para interponer recurso de apelación en caso de inconformidad.

Así lo resolvió la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo García Sánchez (Presidente), Rosa Mireya Félix López y Marisol Cota Cajigas, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el Secretario General de Acuerdos, licenciado Arnoldo Barceló Sainz, que autoriza y da fe.- DOY FE.

Lic. Ricardo García Sánchez.

Magistrado Presidente.

Lic. Rosa Mireya Félix López.

Magistrada.

Lic. Marisol Cota Cajigas.

Magistrada

Lic. Arnoldo Barceló Sainz.

Secretario General

El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se publicó en lista de acuerdos la resolución anterior. - CONSTE.